

Más contenido nacional

Arrasada la elección presidencial por quien abanderó la esperanza del cambio, el anhelo de las empresas constructoras nacionales apunta a desterrar el desequilibrio en la entrega de contratos de obra pública que privilegian desde un ángulo a las firmas extranjeras, y desde otro a una del país con etiqueta de favorita del rey. Colocada, por ejemplo, la prebenda de trato preferencial en Tradeco, durante el sexenio de Felipe Calderón, en el siguiente la firma arañó la insolvencia sin visos aun de recuperación.

Perfilado en el gobierno actual el grupo Higa, la posibilidad de ser rey de las licitaciones la frustró la aparición en escena de la Casa Blanca atribuida a la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera; y la de descanso de Malinalco, del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, construidas y financiadas una y otra por la firma. El escándalo frustró la posibilidad de que participara en un consorcio liderado por una empresa china, para construir y operar el tren de alta velocidad México-Querétaro, por más que la licitación había sido ganada por éste.

Colocada en la primera mitad del actual gobierno como una suerte de patito feo, el Grupo ICA, como usted sabe, arañó la quiebra, debiendo llegar voluntariamente a un concurso mercantil en que se modificó radicalmente la participación accionaria. A pesar de los flancos de incertidumbre frente al proceso electoral y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la inversión extranjera directa al país durante el año pasado fue de 29.7 mil millones de dólares, con énfasis en la creación de plantas automotrices, cuyo monto alcanzó 7 mil millones, 32% más que en 2016.

De ese flujo, de acuerdo con el reporte de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), la construcción alcanzó 3 mil millones, en tanto el transporte y las telecomunicaciones llegaron a 3.2 mil. El problema es que en la feria se ha dejado de lado el contenido nacional. Las compañías de ingeniería del país han sido relegadas pese a su experiencia y capacidad.

Para no ir lejos, una sola obra explica el tamaño del desequilibrio: el tren interurbano México-Toluca, planteado para un tráfico de siete millones de pasajeros con un largo de vía de 58 kilómetros de Observatorio a Zinacantepec en 39 minutos, con nueve estaciones de salida. La construcción se decidió en tres tramos: desde la estación central hasta la parte Zinacantepec-La Marquesa. Este se le asignó a dos firmas españolas, la Peninsular y CPUM, filial de OHL, en tanto el tramo inicial se le dio a Caabsa Constructora y Omega. A ICA se le asignó el túnel.

Ahora que el suministro de 30 trenes eléctricos de cinco unidades cada uno se le otorgó a la española Construcción y Auxiliar de Ferrocarril, quien integró una piñata a sus paisanas Isoluk-Corsán Azui y Thalos. El contrato fue de 690 millones de pesos. La filial de la firma, CAF Signalling, obtuvo otro de señalización, el sistema ATU, el centro de control y los equipos embarcados.

La construcción y el montaje de la vía le correspondieron al grupo Azui, la constructora del grupo Constructora y Auxiliar de Ferrocarriles, CAF, en tanto CMF realizará las instalaciones electromecánicas y junta con la propia CAF Transport Engineering, la ingeniería de integración y coordinación del proyecto. Otra española más, el grupo SENER, fue subcontratado para el desarrollo a proyecto constructivo. ¡Rediez!

Sospechosismo. Sin claridad aún sobre quién llegará a la dirección general del ISSSTE en el gobierno al relevo, se han entregado en la casa de transición una serie de denuncias que habla de favoritismo en la entrega de contratos del organismo. Hace unas semanas la instancia que representa a los distribuidores mayoristas de medicinas se quejaban de una deuda de larga mora de más de 2 mil millones de pesos, en el marco de la compra consolidada liderada por el Instituto Mexicano del Seguro Social. La denuncia habla de haberse inhibido a participantes en las licitaciones para no estorbar el favorito del rey... o la reina. El escándalo toca a la puerta

COLUMNA DE ENRIQUE CAMPOS SUAREZ. Agosto 1 del 2018

Los buenos deseos de los empresarios

Puede ser esa vocación de insistir en sus demandas sin cansarse, o bien las organizaciones del sector privado realmente creen que van a encontrar en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador una respuesta positiva a sus demandas históricas. No hay otra forma de entender por qué organismos como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) o la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) insisten tanto en sus planteamientos, que se ven tan cuesta arriba con un gobierno del corte que plantea la siguiente administración.

Desempolvado del armario de sus mejores deseos, el CCE dio a conocer al gobierno entrante un decálogo que considera necesario para fortalecer el empleo. Viejas ideas propias de una economía de mercado donde se respete el Estado de Derecho, pero que han sido pendientes durante muchos años en México. Desde cumplir la ley, pasando por fomentar la competencia y la apertura comercial, hasta la eternamente anhelada reforma fiscal. La ecuación de fomento a la inversión privada corre en sentido contrario de los planes de una economía asistencialista donde el gasto público será la estrella sexenal.

La reforma fiscal que pretende este consejo que aglutina a cámaras y confederaciones empresariales pasa por una reducción de la carga fiscal a las empresas que seguramente quisieran ver compensada con un incremento en los impuestos al consumo. Los ingresos fiscales en este país son bajos como para tolerar una disminución en la recaudación por los impuestos directos sin tener una compensación por otro tipo de gravámenes. Sin embargo, impuestos como el IVA son todo, menos populares para un gobierno que si algo parece buscar es el confort de sus votantes.

Mientras que la Coparmex pretende, entre muchas otras cosas plasmadas en sus cartas de buenos deseos, la creación de un Consejo Fiscal Independiente (CFI). Esta figura sería la estrellita en la frente para un gobierno que busque hacer de la disciplina financiera la guía de su gobierno, pero sería un balazo en el pie para quien tiene entre sus planes la multiplicación de los planes de asistencia social. Y es que el propio presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, lo plantea quizá como una forma sarcástica de dirigirse al siguiente gobierno: “Ante la inminente puesta en marcha de muchos programas sociales y proyectos de gobierno, que serán altamente demandantes de los recursos públicos, el CFI puede ser la instancia que los valore y acredite en su sustentabilidad de mediano y largo plazo”.

¿Ven realmente al poderoso López Obrador nombrando un órgano autónomo que lo limite en sus planes de gasto a manos llenas del presupuesto público? Quizá deberían tomar como ejemplo la designación del impresentable Manuel Bartlett como próximo director de la Comisión Federal de Electricidad para que entiendan cómo quieren hacer las cosas el siguiente sexenio. Es perfectamente entendible que los organismos del sector privado hagan su carta a los Santos Reyes, pero quizá deberían buscar una negociación en aquellos puntos donde detectan riesgos serios para la actividad empresarial durante el próximo gobierno, antes que pensar que estamos en la antesala del mejor y más prudente manejo financiero en la historia del país.